

**Protestan los
trabajadores
del
Aeropuerto**

Ver página 2

*Marxismo e
indigenismo a debate*

“Interculturalidad”

Ver página 6

Internacional:

- **Obama impone pacto reaccionario en Honduras**
- **Gran lucha y triunfo clasista de 2.700 obreros de Kraft en Argentina**

Ver páginas 7 y 8

Palabra OBRERA

Periódico de la
LOR-CI
Liga Obrera
Revolucionaria
por la Cuarta
Internacional

Nº 38 - Noviembre de 2009

Precio: 2.00 Bs. - Solidario: 3,00 Bs.

Después del 6 de diciembre MAS de lo mismo



No apoye al oficialismo que pacta con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales, ni a la oposición de Reyes Villa, Doria Medina, etc., que son sus directos representantes. El 6, vote en blanco o nulo.

Evo Morales y García Linera quieren el voto popular en nombre del “proceso de cambio” para consolidar el plan que ya han aplicado estos 4 años y que no traerá ninguna solución real a los grandes problemas nacionales ni de los trabajadores y el pueblo humilde: En lugar de nacionalización real del gas y los recursos naturales, contratos beneficiosos para las transnacionales petroleras y mineras. No han cambiado los bajos salarios, la precariedad laboral, el desconocimiento de los derechos obreros y los abusos empresariales. En lugar de tierra y territorio, preservación de la gran propiedad terrateniente y olvido de la reforma agraria. La prometida liberación de los pueblos originarios se ha reducido al “reconocimiento

constitucional” y algunas concesiones parciales. Evo buscará en su segundo mandato completar la “transición al nuevo régimen del “Estado Plurinacional” consagrado en la Constitución Política del Estado “consensuada” en los pactos con la derecha, al servicio de la colaboración de clases con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales, y postergando las demandas obreras y populares.

Frente al proyecto masista, los políticos derechistas, como el ex militar Reyes Villa y sus aliados el terrateniente y masacrador Leopoldo Fernández y el neoliberal Pepelucho Paredes; o el rico empresario y “rey del cemento y las hamburguesas” Doria Medina, plantean

“propuestas” abiertamente conservadoras, reaccionarias y proimperialistas. En cuanto a candidaturas como la de Alejo Véliz (aliado a elementos de la derecha cochabambina) o Román Loayza, no representan ninguna alternativa ante el MAS. **En las próximas elecciones ninguna opción expresará los intereses obreros y populares.** Por eso, los socialistas de la LOR-CI llamamos a **votar blanco o nulo el 6 de diciembre** y a sumarse a la lucha por la organización política independiente de la clase trabajadora, con un programa obrero y popular para que la crisis la paguen los empresarios, los terratenientes, los banqueros y las transnacionales, y por una salida socialista.

Tareas del movimiento obrero hoy

¿Se puede conciliar los intereses de trabajadores y empresarios, como pretende el MAS?

El gobierno ha anunciado con bombos y platillos el inicio de operaciones de la empresa Coro Coro (que producirá cobre) en manos de una empresa coreana, es decir, continuando su política de concesiones a las transnacionales mineras (como ya mostraron la concesión de El Mutún a la indo-británica Jindal y otras). Casi al mismo tiempo, el gobierno comprometía respetar la “seguridad jurídica” a la trasnacional española Abertis Aena, que opera a través de su filial SABSA los aeropuertos centrales del país, y su Ministerio de Trabajo emitía un laudo arbitral perjudicial a las justas demandas de los trabajadores aeroportuarios.

Entre tanto, actúa como “operador comercial” de grandes empresarios como Iberkleid y otros exportadores.

Toda esta práctica gubernamental es expresión de la estrategia del MAS de colaboración de clases con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales, y en la que se basan los pactos que el gobierno mantienen con diversos sectores empresariales, nacionales y extranjeros. Con ello, los capitalistas mantienen “seguridad jurídica” tienen el pleno respeto a la propiedad privada de fábricas, empresas y bancos, y se les garantiza no sólo el mantenimiento de las condiciones de explotación de los trabajadores impuestas bajo los gobiernos neoliberales (bajos salarios, precarización, flexibilización y terciarización laboral, recorte de conquistas obreras, restricción de derechos sindicales, etc.), sino que el Gobierno, con la intervención de su Ministerio de Trabajo y la

ayuda de los dirigentes oficialistas, les garantiza también “paz social”, esto es, que las luchas de los trabajadores no se extiendan hasta cuestionar ese estado de cosas que sólo beneficia a los empresarios. El contenido de esos pactos “no escritos”, justificados con la idea de unir al esfuerzo de empresarios y obreros para “producir” y para “exportar” (como en textiles), o de asociar al desarrollo nacional al capital extranjero (como en minería e hidrocarburos), es mantener bajos salarios y el máximo de explotación, para que los empresarios engorden al máximo sus ganancias a costa de la explotación y el sacrificio de los trabajadores.

Para lograr esto, cuentan con la colaboración de las directivas de los entes matrices como la COB, las CODes y la mayoría de las Confederaciones y federaciones, que no plantean la lucha por el salario y demás demandas obreras, y cuando algún sector sale a reclamar, lo dejan aislado y “miran para otro lado” o intervienen para frenar la lucha.

Así, hemos visto en ex DBU que debido a las presiones de

dirigentes masistas de la COR, se llevó a los trabajadores al desgaste y desmoralización de su sindicato, hasta imponer el lamentable saldo del despido de 74 trabajadores, todos ellos combatientes por la nacionalización de la empresa. En Luz y Fuerza (EDESER) en la Paz los trabajadores no pueden imponer el pago correspondiente de su laudo arbitral ya ganado, debido a que desde el gobierno se hacen respetar argumentos legales que favorecen a la trasnacional española IBERDROLA. Recientemente, los trabajadores de La Estrella se vieron obligados a llevar adelante una huelga y ocupación de empresa pese a la oposición de miembros del sindicato.

Además, cada vez que la política de conciliación, pactos y compromisos con los empresarios es cuestionada por los trabajadores, el gobierno y sus amigos dirigentes atacan a la vanguardia, como sucedió en Huanuni, sancionando a luchadores que impulsaron la lucha por la ley de Pensiones, atacando por trotskistas a dirigentes combativos del

magisterio, etc.

El gobierno llega al extremo de impedir que sectores de trabajadores estatales se sindicalicen, como ha decidido con los trabajadores de Boliviana de Aviación (BOA) que estén sujetos al “estatuto de funcionario público” (heredado de las dictaduras) y que prohíba organizar sindicatos a los empleados del Estado. Hace un tiempo, los trabajadores municipales de la Paz, Cochabamba y otras ciudades han debido movilizarse reclamando este derecho ante la negativa oficial.

Así, gobierno y empresarios mantienen las condiciones más favorables para acumular grandes ganancias bajando los “costos laborales”, pero cuando hay dificultades económicas, siempre las pagan los trabajadores, con despidos, precariedad y salarios de hambre. Hoy, además de contar con la ayuda de los dirigentes burocratizados, aprovechan el clima de la campaña electoral para contener y postergar los reclamos obreros, sabiendo que siempre a fin de año, hay presión de los trabajadores por lograr alguna recomposición salarial, por el cumplimiento en fecha del aguinaldo y otros beneficios, etc. Ante esta situación, la tarea que tienen planteados los trabajadores avanzados y los dirigentes de base combativos, es impulsar la solidaridad con las luchas, buscando la mayor unidad con aquellos sectores que estén

dispuestos a salir en defensa del salario, del cumplimiento de los derechos sindicales y todos los beneficios laborales (bonos, aguinaldo, etc.), contra los abusos patronales y despidos, por la estabilidad laboral.

En este camino habrá que enfrentar no sólo a los empresarios, sino también el rol del gobierno y sus funcionarios laborales, y a las propias direcciones de la COB, CODes, COR, etc., que apoyan su política y no encabezan las luchas obreras. Es necesario comenzar a discutir cómo unir la lucha sindical y política. *Sindical*, ya que no podemos permitir que nuestros compañeros de diversas empresas y fábricas, peleen solos. Es necesaria la mayor y más amplia solidaridad obrera y popular en cada lucha, en cada reclamo, para evitar que con cada derrota empresarios y Gobierno avancen en sus intenciones de que nuestro salario sea la “esponja” que absorba los costos de la crisis para preservar sus ganancias. *Política*, ya que esta lucha es inseparable de la pelea por la independencia política de la clase obrera y contra la ilusión de que se pueden “conciliar” o “armonizar” los intereses de los empresarios y de los trabajadores, o de que confiando en el Gobierno y su Ministerio de Trabajo, se puede obtener respuesta real a nuestros problemas.

Por Javo Ferreira



Aseo Urbano El Alto

Siguen abusos contra los trabajadores

El viernes 6 de noviembre, los trabajadores del Distrito 1 de la empresa Trébol S.A., se movilizaron a las puertas de la base por atropellos que los supervisores vienen realizando contra los trabajadores en complicidad con la empresa y el sindicato “amarillo” (recordemos que este sindicato fue posesionado gracias a una operación combinada entre la empresa, dirigentes de la COR, el Ministerio de Trabajo y algunos empleados en el mes de febrero). Ya dos semanas antes, los trabajadores del Distrito 8 se vieron en la obligación de movilizarse a la sede de la empresa en la ciudad de la Paz ante el intento de volver a contratar un supervisor que había

sido despedido por robar el salario de los trabajadores a su cargo. Este supervisor, Raúl Clemente Mamani Salinas, junto a un miembro del sindicato, el Sr. Pablo Osco, han obligado a los trabajadores a realizar trabajos que no correspondían, se niegan a trasladar en las movilizaciones a los trabajadores que no son incondicionales de la empresa hasta los lugares correspondientes de trabajo. Esta gente ha llegado al extremo de falsificar las huellas dactilares de la Sra. Teodora Mamani, quien no cobró salarios de agosto y septiembre, así como se realizaron descuentos arbitrarios a decenas de trabajadores.

Nos solidarizamos con los traba-

jadores de base de Aseo Urbano de El Alto y su lucha contra los abusos patronales. Está planteado preparar la recuperación del sindicato con instrumento de lucha de los trabajadores, por el salario, la estabilidad laboral y todos los derechos de las y los trabajadores, pero también, como vocero que denuncie los malos manejos de la empresa y la corrupción que perjudican el servicio de recolección de residuos al pueblo altoño. Así se reabrirá el camino para luchar por la municipalización del servicio de aseo urbano y su administración colectiva por los trabajadores de base de la empresa, con participación de las juntas vecinales.

SABSA aprovecha confuso laudo arbitral para robar a los trabajadores

El 27 de octubre, los tres aeropuertos del eje central se vieron afectados e interrumpidos algunos vuelos ante los enfrentamientos y paro de labores debido a la brutal provocación empresarial de SABSA, que se niega a pagar no solo horas extras sino los dominicales y días feriados a los trabajadores aeroportuarios. Este martes, luego de una intensa negociación entre la empresa, sindicato y Ministerio de Trabajo, y ante la decisión de la empresa de atenerse a lo resuelto por el Laudo Arbitral emitido por el Ministerio de Trabajo, que de 4 puntos, tres son a favor de la empresa y uno ambiguo, los trabajadores empezaron un mitin de protesta que fue brutalmente reprimido por la policía antimotines y la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea y la policía antes del medio día ya habían estado poniendo sus efectivos por fuera de la Terminal. En el momento del mitin ingresan al Hall soldados de la 1ª Compañía de la FAB y luego policías antimotines. Entre tanto en Cochabamba los trabajadores terciarizados del aeropuerto llevaron adelante una huelga de brazos caídos y en Santa Cruz se realizaban mítines de protesta aunque sin llegar a la paralización de actividades. Los trabajadores actualmente se encuentran amenazados con procesos penales en particular a los dirigentes de los respectivos sindicatos. Llamamos a las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares a brindar nuestra más amplia solidaridad con los trabajadores aeroportuarios, en sus justas demandas y contra todo intento de represalia.

Claves de la coyuntura

¿Qué se votará el 6 de diciembre?

A CUATRO SEMANAS de la votación, Evo Morales y el MAS mantienen una clara ventaja, con más del 50% de la intención de voto en distintas encuestas, frente a una oposición derechista debilitada y deslucida. Reyes Villa, apostando al reagrupamiento de las fuerzas conservadoras más recalcitrantes –neoliberales, “cívicos”, clericales, etc.– rondaría un 20% de votantes; Unidad Nacional estaría en un 12% y mucho más atrás René Joaquino y su “Alianza Social” rasguñarían un 3% de apoyo en las urnas.

Ante el previsible triunfo de la fórmula oficialista, el centro de la disputa electoral se traslada a cómo se integrarán las cámaras de diputados y senadores que conformarán la “Asamblea legislativa Plurinacional”.

El MAS quiere alcanzar el control del senado y una mayoría parlamentaria de 2/3, para poder avanzar más fácilmente en las numerosas leyes que necesitará para implementar el nuevo ordenamiento estatal delineado en la Constitución Política del Estado: el nuevo régimen del Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, la derecha lucha por retener el mayor espacio parlamentario posible, para condicionar y obligar a nuevos pactos al MAS y para mantener vigencia política.

Dos “frentes de lucha” entre oficialismo y opositores son la disputa por el voto en santa Cruz y otros departamentos orientales, donde el MAS busca perforar el antiguo control electoral de cívicos y políticos derechistas; y la disputa por el voto de las clases medias, donde el oficialismo trata también de recuperar terreno y lograr una mayoría de apoyo urbano.

La importancia que da el MAS a estos objetivos lo muestran el tono general más que moderado y “clasemediero” de su campaña, la integración de sus listas con figurones de derechos humanos bien vistos en la pequeña burguesía como Ana M. Campero o los candidatos puestos por el Alcalde paceño Del Granado; y también los vergonzosos acuerdos para incorporar sectores de la Juventud Cruceñista (grupos de choque de la asonada reaccionaria de septiembre del 2008) y del autonomismo.

Un gobierno fortalecido

En este marco, el gobierno aparece fortalecido, contando con una situación económica de “desaceleración” y algunas dificultades que lo obligan a recortar fondos (como con el IDH y otras partidas de gasto social para el 2010), pero manteniendo un crecimiento del 3% del PBI este año y el “equilibrio macro económico”, lo que le valió la complacencia de empresarios y banqueros y hasta



felicitaciones del FMI.

No es casual que tenga buen trato con empresarios y exportadores, esté “reconciliándose” con la oligarquía cruceña y mantenga buenas relaciones con las transnacionales, en particular los grandes inversores mineros, a todos los cuales les garantiza “paz social”, contención de los reclamos por el salario y el empleo, y “seguridad jurídica” para hacer grandes negocios y jugosas ganancias.

Además, si por un lado mantiene excelentes relaciones con los mandos militares y policiales y ha logrado ampliar su control del aparato estatal y la justicia, por otro lado cuenta con amplio apoyo social y ha logrado cooptar a las direcciones de la COB y la mayoría de los sindicatos, además de las organizaciones del CONALCAM, lo que le garantiza control sobre el movimiento de masas, le permite aislar las luchas y hasta perseguir a los sectores de vanguardia.

Esta fortaleza política del MAS tiene uno de sus puntos de apoyo claves en los pactos y acuerdos con las distintas expresiones de la clase dominante (y con el aval de la OEA, Brasil y UNASUR), que, ha cambio de enormes concesiones y garantías a la burguesía han viabilizado la aprobación de una nueva CPE “consensuada” con la derecha y el llamado a estas mismas elecciones de diciembre.

El rumbo del MAS y el nuevo régimen del “Estado Plurinacional”

Por todo ello, el curso del MAS es a consolidarse como “árbitro” nacional, acentuando sus rasgos semibonapartistas. Desde el punto de vista de las relaciones con las clases sociales, esto significa que diluye aún

que hacen los grandes, medianos y pequeños empresarios convocados a construir el “capitalismo andino”.

Pese a la competencia electoral, priman los pactos

El Semanario neoliberal Pulso dice que la polarización política se está diluyendo y que “no hay oposición”. UNITEL se queja de que hay que “calentar la campaña”. Que en plena campaña electoral pese ese clima de distensión tras la larga crisis política que crispó el país en tiempos recientes se explica por los pactos que han limado diferencias y aproximado posiciones. El gobierno viene girando a la derecha, como garante de la contención del movimiento de masas y “árbitro” nacional, al frente de un plan de reformas en los marcos del orden burgués que ha terminado por ser aceptado, con más o menos reparos, por la mayor parte de la clase dominante pues para nada pone en riesgo la propiedad privada (como el mismo Evo no se cansa de repetir) ni los intereses claves de la burguesía y el imperialismo. La oposición derechista sufrió derrotas políticas durante el año pasado pero logró pactos favorables y grandes concesiones en la CPE y bien que mal, se preparan a ser oposición dentro del nuevo esquema económico y político, para obtener los máximos beneficios posibles, bloquear cualquier “veleidad” populista del gobierno y ponerle límites a su uso de la autoridad, esperando mejores tiempos para volver al poder.

Ni oficialismo ni oposición

El 6 de diciembre, además de definir el personal político que se sentará en el palacio Quemado y los curules del Congreso, no se vota “la profundización del proceso de cambio” ni “un paso hacia la liberación nacional”, sino la consolidación del proyecto del MAS de colaboración de clases con los empresarios, los banqueros, los terratenientes y el capital extranjero, y un salto en la estabilización política del país, basada en enterrar la “Agenda de octubre” y postergar las demandas obreras, campesinas, indígenas y populares, en lo que básicamente, a pesar de sus diferencias y disputas, coinciden el MAS y la oposición. Es contra ese nuevo régimen que los trabajadores y el pueblo pobre tendrán que prepararse a luchar por sus demandas inmediatas e intereses históricos.

Por Eduardo Molina

¿Por qué no se concretó una alternativa obrera y socialista?

Desde la LOR-CI hemos venido dando un fuerte combate político por poner en pie un polo de independencia de clase, frente al oficialismo como frente a los partidos de la derecha empresarial y terrateniente. En meses anteriores se llevaron a cabo varias reuniones con grupos de izquierda, para lo que abrimos las puertas de nuestra sede, la Casa Obrera y Juvenil de El Alto. En esas discusiones insistimos en la necesidad de presentar una opción de clase de los trabajadores, con un programa obrero y popular, claramente anticapitalista y por el socialismo, opuesta a toda variante de colaboración de clases con la burguesía, que como muestra la experiencia del MAS, sólo sirve para preservar los intereses de los explotadores, postergar las demandas obreras, campesinas y populares y es incapaz de resolver los grandes problemas nacionales, como la liberación del imperialismo.



Santa Cruz, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Soberanía y Libertad Katarista, y la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, llegamos a acordar los puntos de una declaración política progresiva que apuntaba a la independencia política de los trabajadores y con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y el imperialismo, como base para constituir el Frente de Trabajadores y por el Socialismo. El POR-Masas, impotente para levantar ninguna política concreta que ayude a los trabajadores a organizarse políticamente de manera independiente, ha mantenido su rutinaria y vieja línea abstencionista frente a las elecciones. Este primer paso se dio en medio de una fuerte lucha política contra grupos que, diciéndose de izquierda y hasta revolucionarios, querían sin embargo imponer un frente amplio” para ir detrás de Loayza, Roberto de la Cruz y otros “figurones” populistas y reformistas, con el argumento de “unir a los actores de octubre”, sin ver que hoy esa unidad no sólo es imposible –pues divide aguas la posición ante los últimos 4 años de gobierno de Evo, que por ejemplo Loayza integró presidiendo la bancada constituyente masista, sino hasta reaccionaria, pues tal unidad, sin programa ni definición de clase, sólo puede hacer

retroceder a los sectores de vanguardia que vienen haciendo una experiencia con el MAS y buscan una alternativa. Al no poder imponer su política, algunos elementos, como las JVR (ligados a la UIT-CI), que han trabajado sistemáticamente como operadores políticos de arribistas como De La Cruz, un ala del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (cuya fracción de “izquierda” estuvo ligada al My. Vargas y Loayza), el F AUP o el miembro de la llamada “Confederación Nacional de Desocupados” prefirieron retirarse. Lamentablemente, luego de haber aceptado el acuerdo y a último momento, miembros de la Central Obrera Departamental de Oruro, particularmente el ex ejecutivo de la COB Jaime Solares, se retiraron del Frente pro considerarlo “sectario” y a la espera de negociar algún compromiso oportunista con De la Cruz, Loayza y otros. Esta defección terminó saboteando la posibilidad de presentar un polo por una política independiente de la clase obrera. La reaccionaria legislación electoral, heredada del neoliberalismo, defendida por el gobierno y la oposición y administrada por la CNE para hacer casi imposible la presentación de nuevas fuerzas obreras y socialistas, cerró toda

posibilidad de presentar candidaturas obreras y socialistas en estas elecciones, que pudieran utilizar la tribuna electoral para apoyar las luchas y demandas obreras y populares y propagandizar un programa de los trabajadores. Sin embargo, esta lucha sigue planteada. Por eso, los socialistas de la LOR-CI llamamos a la vanguardia

obrero, y a los sectores avanzados del movimiento estudiantil, vecinal y popular a no depositar su voto ni en el oficialismo reformista ni en la oposición empresarial, y a sumar esfuerzos para poner en pie una alternativa de independencia de clase de los trabajadores.

Por Javo Ferreira

Véliz y Loayza: Variantes “campesinas” que no son alternativa

Estas candidaturas intentan hablar desde el “campo campesino y popular” y disputar un espacio al MAS, aunque con pocas posibilidades, pues ni hay rupturas políticas de masas con Evo, ni constituyen ninguna alternativa real al proyecto masista. Alejo Véliz, con PULSO, se apoya en sectores agrarios del Valle, se alió con elementos de la derecha cochabambina y representa al ala derecha del movimiento campesino, habiendo buscado contacto en distintas ocasiones con la derecha cruceña y Reyes Villa. No tiene nada que ofrecer a los campesinos e indígenas pobres y aunque “se ponga poncho”, juega para la burguesía y la reacción. Román Loayza, que había roto con el MAS declarando que Evo “constitucionalizaba el neoliberalismo”, terminó uniéndose a un empresario para prometer “apoyo a la producción nacional” con un programa burgués, Porfirio Quispe, empresario dirigente de CODEINA (Comité de defensa de la Industria Nacional) que luego rompió con él ante la perspectiva de sacar pocos votos. Su nuevo “vice” es nada menos que Guillermo Becar, un ex masista “clase mediero” expulsado hace un tiempo del partido de gobierno. Lo acompaña también Felipe “Mallku” Quispe (cuyos intentos de reflotar el MIP han fracasado) como candidato a diputado plurinominal por La Paz, presentando una confusa propuesta política que no va más allá de mezclar elementos de nacionalismo, populismo e indigenismo sin diferenciarse en nada sustancial del discurso oficialista.

TRES PROGRAMAS

Las propuestas electorales de los partidos y los problemas de los trabajadores y el pueblo

Evo Morales y el MAS

Aplican desde el gobierno un programa reformista de colaboración de clases con los empresarios, terratenientes y el capital extranjero proponiendo apenas algunas reformas superficiales, como mostraron los acuerdos con las petroleras o la nueva Constitución. Bajo el discurso del “proceso de cambio” defiende la visión de la pequeña burguesía (dirigentes burocratizados, intelectuales y tecnócratas “clases medieras”, pequeños y medianos propietarios, etc.) que se aprovecha de las expectativas populares y difunde la utopía de que es posible “humanizar” el capitalismo y conciliar los intereses de los explotadores y el imperialismo con los de la nación oprimida y los explotados. Mas que sus promesas, hay que juzgar qué hicieron en 4 años de gobierno.

Los partidos de la derecha

Representan directamente a los empresarios, los terratenientes y las camarillas ligadas al saqueo imperialista, y quieren reducir al mínimo cualquier cambio. El ex militar Reyes Villa (PPB-CN) busca reunir a la reacción más conservadora y propone revisar la CPE. Doria Medina (UN), rico empresario y “rey del cemento y las hamburguesas” es otra opción burguesa aunque más “conciliadora” con el proyecto masista. Otras opciones menores, como Joaquino (AS) (aliado a sectas cristianas) no se distinguen de estas propuestas.

Programa obrero y socialista

Un frente de los trabajadores y por el socialismo como el que hemos impulsado desde la LOR-CI hubiera utilizado la tribuna electoral para plantear estas medidas no como vagas promesas electorales al estilo del oficialismo y la oposición, sino como tareas de un programa de acción, para que lo tomen en sus manos y lo impongan con su movilización los trabajadores y el pueblo pobre, como parte de una salida real y de fondo a los problemas nacionales y del pueblo trabajador mediante un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones de masas. Hay que construir un partido que luche consecuentemente por esta perspectiva.

<p>¿Cómo recuperar realmente el gas, los minerales y recursos naturales para el pueblo?</p>	<p>Pactó con las transnacionales petroleras para que sigan operando en el país. Con la nueva Constitución les garantiza sus negocios y ganancias. Entrega la minería al capit al extranjero, como en El Mutún, Corocoro, etc. Ahora busca un “socio” para explotar el litio del salar de Uyuni.</p>	<p>Reyes Villa quiere mayor entrega del gas a las petroleras y mineras y rematar el litio del Salar. Doria Medina también está por la apertura al capital extranjero y por las mayores concesiones a los grandes empresarios a costa de los intereses del país y la explotación de los trabajadores.</p>	<p>Contra los contratos con las petroleras y la entrega de los minerales a las transnacionales. Por la nacionalización real de los hidrocarburos y minerales, sin indemnización a las empresas saqueadoras y bajo control obrero colectivo.</p>
<p>¿Cuál es su política internacional y qué relaciones plantea con el imperialismo?</p>	<p>Aunque tiene algunos roces con el gobierno de Estados Unidos, sólo busca regatear un cierto grado de autonomía política, al igual que Chávez y los países del ALBA. Por eso, Evo mantiene soldados bolivianos en Haití como parte de la fuerza de ocupación al servicio del imperialismo que mandó las Naciones Unidas y más allá de algunas declaraciones, no movió un dedo ni llamó a movilizar contra el golpe en Honduras.</p>	<p>Reyes Villa y Doria Medina compiten en criticar la alianza de Evo con Chávez, porque quieren realinear a Bolivia directamente bajo las órdenes de Estados Unidos.</p>	<p>Hay que romper la sujeción al capital extranjero y los pactos que nos atan al imperialismo. Retiro inmediato de las tropas bolivianas que forman parte de la ocupación de Haití. Por la movilización continental para derrotar al golpe proyanqui en Honduras. Unidad de los obreros y campesinos de toda América latina en la lucha contra el imperialismo y sus agentes nativos, hasta imponer revolucionariamente una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.</p>
<p>¿Qué solución proponen para el problema de la tierra?</p>	<p>La nueva CPE enterró la posibilidad de una verdadera reforma agraria, protege los latifundios existentes y solo pone el límite de 5.000 Has. para futuras nuevas gran propiedades.</p>	<p>Defienden la propiedad privada de la tierra y están a favor de la gran agricultura empresarial a expensas de los campesinos y pueblos indígenas</p>	<p>Por una verdadera reforma agraria, liquidando la gran propiedad terrateniente, nacionalizando la agroindustria bajo control de sus trabajadores y organizando un plan de desarrollo agrícola que contemple las necesidades de los campesinos pobres y las comunidades.</p>
<p>Ante la escasez de trabajo, el desempleo y la precarización laboral</p>	<p>Aunque derogando algunas normas, el gobierno de Evo Morales ha mantenido lo fundamental de la “desregulación” neoliberal del trabajo, impuesta con el DS 21060. Ha dejado correr miles de despidos en la minería y la industria y el propio Estado mantiene a miles de trabajadores precarizados.</p>	<p>Bajo la demagogia de “crear empleo” -viejo slogan de los partidos neoliberales-, defienden a los capitalistas y quieren más precarización y flexibilización laboral.</p>	<p>Prohibición de despidos. Nacionalización de toda empresa que cierre o despidiera. Plan de obras públicas bajo control de los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre, para crear empleo digno. Pase a planta de todos los eventuales y terciarizados. Basta de precarización y flexibilización laboral.</p>
<p>¿Qué proponen ante los bajos salarios?</p>	<p>Mantiene los bajos salarios en beneficio de los empresarios. Gracias a sus amigos de la burocracia sindical, subordina a la COB y los sindicatos para que estos no impulsen la lucha por el salario y las reivindicaciones obreras.</p>	<p>Defiende la explotación y quieren bajos salarios en beneficio de las ganancias empresariales. Son enemigos de que los sindicatos sean instrumentos de la lucha por los derechos de los trabajadores.</p>	<p>Aumento general de emergencia de salarios, en el camino de conquistar el salario mínimo vital y con escala móvil. Que la COB y los sindicatos rompan con el gobierno para recuperarlos como herramienta de lucha de los trabajadores.</p>
<p>¿Qué ofrecen a los pequeños productores?</p>	<p>El Gobierno promete seguirlos favoreciendo desde créditos estatales y algunas limitadas políticas de promoción, dentro de una estrategia que poco se distingue de las políticas de anteriores gobiernos, puesto que mantiene el “libre mercado” y la “apertura” de la economía a las importaciones aún en perjuicio de la producción nacional.</p>	<p>Buscan apoyo de los pequeños productores agrarios y urbanos con la promesa de créditos y mercados externos. Ocultan que son el “libre mercado” y el dominio de los grandes empresarios e intermediarios, la usura de los bancos y la estructura retrógrada de impuestos lo que ahoga al pequeño productor nacional.</p>	<p>El monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de la banca permitirían ayudar al artesano, al campesino, al “gremial”, con crédito barato y ayuda técnica y incorporarlo voluntaria y paulatinamente a una economía nacionalizada y planificada.</p>
<p>Frente a la opresión de los pueblos originarios</p>	<p>Los enunciados de la nueva CPE reconocen a los pueblos originarios pero recortan o reducen a frases sus derechos nacionales, como el territorio. El viejo Estado burgués y opresor apenas cambia de nombre como “Estado Plurinacional”. Las bases materiales de la opresión y la discriminación no son afectadas por la CPE.</p>	<p>Reyes Villa impulsó los hechos de enero de 2007 en Cochabamba y Fernández estuvo detrás de la masacre de El Porvenir en 2007. Son abiertamente enemigos de los campesinos y los pueblos originarios. Aunque Doria Medina “cuida las formas”, también es contrario a que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plenos.</p>	<p>Para asegurar a los pueblos originarios plenos derechos y autodeterminación y para liquidar las bases de la opresión racista, hay que aplicar profundos cortes en el derecho burgués de la propiedad privada. Por ejemplo, asegurar la tierra y el territorio es inseparable de una verdadera reforma agraria.</p>
<p>La impunidad de los represores y el tema de la “seguridad”</p>	<p>Aunque promueve el juicio a Goni mantiene la impunidad para los oficiales masacradores de octubre del 2003. Defiende a la corrupta policía actual y a la casta de oficiales de las FF.AA. El MAS acepta el discurso de “seguridad” promovido por la burguesía y el imperialismo en toda América latina para justificar más represión, criminalizar las protestas populares y desviar la culpa de la grave crisis social generada por el capitalismo hacia los sectores más marginados.</p>	<p>Reyes Villa colaboró con García Meza y cogobernó con Sánchez de Losada durante la masacre de octubre de 2003. Se asoció con Leopoldo Fernández -que promovió la masacre de El Porvenir-, para defender la impunidad de los represores. Él y Doria Medina, bajo el argumento de la “seguridad” piden más policía y leyes más duras para reprimir las luchas obreras y populares, a los pobres y a los jóvenes humildes.</p>	<p>Contra la impunidad, juicio y castigo a todos los represores y torturadores de las dictaduras militares y de las masacres como la de octubre de 2003. No hace falta más policía y leyes más duras sino encarar la gran crisis social que acarrea la desocupación, el subempleo y la miseria. ¡Trabajo digno para todos! Disolución de la corrupta Policía y que las labores de seguridad sean ejercidas por una milicia obrera y campesina.</p>
<p>Ante la crisis de la educación y la salud y la falta de vivienda para el pueblo</p>	<p>A pesar de los recursos del Estado (IDH, etc.) sigue habiendo enormes déficits en los servicios básicos, porque el gobierno del MAS conservó lo esencial de la institucionalidad neoliberal, mantuvo presupuestos limitados y sus planes, como en Educación, no atienden las necesidades reales de la población o atacan a los legítimos intereses de los maestros. Su insuficiente Plan de Vivienda está subordinado al “mercado” y las constructoras.</p>	<p>Subordinan la educación fiscal, la salud pública y la vivienda del pueblo humilde a los intereses de los ricos y empresarios. Sus verdaderas políticas se las dictan los “expertos” de las agencias imperialistas como en tiempos de la tristemente célebre “reforma educativa” de los 90.</p>	<p>La nacionalización de las grandes empresas y una escala progresiva de impuestos a los ricos permitiría implementar verdaderos planes de educación, salud y vivienda, bajo control de los trabajadores, maestros, padres de familia, etc.</p>
<p>Ante la crisis de la Universidad</p>	<p>El MAS pactó con las camarillas que parasitan la universidad pública, protege a los mercaderes de la educación privada y la Iglesia y quisiera romper la autonomía para controlar más directamente la vida de la U.</p>	<p>Están con las camarillas derechistas en la “U” pública y son hostiles a la autonomía, como Reyes Villa que desde la prefectura de Cochabamba persiguió a los estudiantes luchadores. Defienden a los mercaderes de la educación privada y a la Iglesia.</p>	<p>Por una Universidad científica, al servicio de las luchas de los trabajadores y campesinos. Aumento del presupuesto y control estudiantil del mismo. Contra las camarillas que hoy la hunden en la crisis. Porque las autoridades sean elegidas con voto universal y directo y bajo un gobierno tripartito, con mayoría estudiantil.</p>

Debates sobre indigenismo y marxismo

¿Es la interculturalidad la forma de salir del atraso y la pobreza?

EN AMÉRICA LATINA, como parte del ascenso de la lucha de los trabajadores, los campesinos y sectores populares de los últimos años, se ha dado un amplio desarrollo de movimientos indígenas, que levanta no sólo demandas relacionadas con la tierra, sino reafirma sus identidades culturales particulares y sus derechos como pueblos, en un genuino espíritu nacional “originario”. Como respuesta, han surgido desde diversos ámbitos –gobiernos, ONGs, corrientes políticas populistas e indigenistas, propuestas que proponen resolver esas demandas a través de políticas basadas en la “interculturalidad”. En Bolivia, con la llegada al gobierno de Evo Morales y el MAS, la política oficial envuelve en una mezcla ideológica confusa de fraseología indigenista, discursos democráticos y elementos semi-marxistas, combinado todo esto con apelación a la “patria” y a la “bolivianidad”, dentro de la que sobresale por su persistente retórica, la **interculturalidad** como política de Estado que supuestamente permitiría responder a las demandas indígenas.

Autonomías indígenas

A partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se pone en marcha la aplicación de las llamadas autonomías indígena-campesinas, como expresión territorial e institucional de la interculturalidad, ya que para que haya interculturalidad, es decir “diálogo” entre culturas, es necesario que existan en primer lugar los sujetos portadores de estas culturas. Estas autonomías tendrían la posibilidad a partir de su estructuración en el Estado de constituirse como tales. Este reordenamiento político, institucional y cultural del Estado sería el mecanismo para salir del atraso y la miseria al reconocer e incluir a los pueblos indígenas y abrir paso así, según los personeros de gobierno¹, a la redistribución de recursos naturales y poder político a estas nuevas instituciones estatales. En palabras del vicepresidente: “En otros términos, voy a trabajar la propuesta de una descentralización política en el nivel intermedio del Estado, bajo la forma de regímenes autonómicos con comunidades lingüísticas indígenas. El interés que deposito en esta temática se debe a que uno de los grandes problemas de la incompletitud estructural de la formación estatal boliviana, de su gelatinosidad institucional y permanente desencuentro con la sociedad, radica precisamente en su

*monoetnicidad y monoculturalidad que ha dado lugar, desde el nacimiento como república, a estructuras políticas excluyentes, sistemas de reconocimiento sociales racializados y continuos procesos de segregación interna.”*² Así, García Linera le quita toda sustancia a su diagnóstico, al negarse a hablar en sus trabajos, en sus discursos y finalmente en sus políticas del papel de las relaciones y antagonismos de las clases sociales en ese entramado “gelatinoso”. La operación ideológica es negar el carácter de clase de los fenómenos reales de los que habla y denuncia, reduciéndolos a sus manifestaciones étnico-culturales, como el lenguaje y color de piel, con lo que pretende detenerse en las soluciones superficiales, sin abordar las bases materiales a las que está sujeta la situación de opresión de los pueblos originarios, entre ellas: el acaparamiento de tierras por las oligarquías regionales en el Oriente, la explotación capitalista de los trabajadores que encuentra en el racismo y la discriminación étnico-cultural un refuerzo social e ideológico, la subordinación al imperialismo.

La “interculturalidad”

Esto no es olvido o casualidad, tiene que ver con la adaptación política operada en los círculos de la izquierda de clase media durante los años 90, período de enorme retroceso ideológico y extensión de las ideas de la “posmodernidad”, y en la que la “descolonización” y la “interculturalidad” fueron tomando cuerpo hasta llegar a convertirse en Bolivia en política estatal. El discurso del relativismo cultural y su expresión política concreta, la interculturalidad, se fue desarrollando en Europa y EEUU en los primeros años 90. Entre sus fundamentos podemos señalar: La enorme ofensiva ideológica que las burguesías imperialistas desplegaron luego de la caída del Muro de Berlín y el colapso de lo que hasta entonces se conocía como “socialismo” real, en una etapa de duras derrotas y reflujos de los trabajadores a nivel internacional. Esto servía de justificativo a la proclama nihilista del fin de los “meta relatos”, “de todo universalismo”, del “fin de la historia” para decir que habían muerto el proletariado y la posibilidad de una emancipación socialista de la humanidad. Cuando diversos movimientos de resistencia, como el de los pueblos indígenas comienzan a desarrollarse, se pretenderá encausarlos dentro del régimen de

la democracia, con un discurso de “inclusión” y “reconocimiento” que permita desgastar su filo más cuestionador y subversivo a cambio de pequeñas concesiones de tipo político-formal.

Otro elemento en el desarrollo y extensión de las políticas interculturales, va a provenir de las necesidades de las transnacionales que dominan la investigación biológica y genéticas, la alimentación y la industria farmacéutica, que advierten que los saberes y conocimientos de los pueblos oprimidos del Tercer Mundo, particularmente indígenas, podían ser fuentes de multimillonarios negocios y por lo tanto había que promover y proteger su preservación como “patrimonios intangibles o culturales de la humanidad”.

En Bolivia, la particular confluencia de elementos tan contrapuestos como la situación de demandas nacionales insatisfechas entre los aymaras, quechuas y pueblos del oriente, la necesidad de fortalecer el Estado burgués en todo el ámbito territorial, incluida el área rural, las necesidades de ‘modernización’ para el desarrollo del capital, llevaron a que el primer gobierno de Sánchez de Losada, como parte de las “reformas de segunda generación” neoliberales, impusiera leyes conocidas como expresión del **interculturalismo liberal**: la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular. La Ley de participación popular fue considerada por el movimiento indígena una de las peores formulas de colonización, ya que lo que provoco, fue la acelerar los procesos de disgregación comunal al sentar las bases del Estado burgués semicolonial en los lugares donde no existía. AGL, sin embargo opina que: “*En todo ello hay que reconocer que la participación popular ha permitido, no tanto por intención propia sino por empuje de las propias comunidades, que varias alcaldías modifiquen parcialmente los usos lingüísticos en la gestión administrativa.*”³ (que incluye en el proceso de municipalización las áreas campesinas e indígenas) y la ley INRA que incorpora la figura de las Tierras Comunitarias de Origen. Fracasadas las políticas tradicionales de la burguesía boliviana, de mantener oprimidos o “disolver” a los pueblos indígenas, a través de estos mecanismos, se pretendía cooptarlos y contenerlos bajo un discurso “pluri-multi”.



Obreras alteñas reclaman ante el Ministerio de Trabajo. La condición de explotados de origen campesino y aymara o quechua, etc. es compartida por una gran parte del proletariado más explotado de Bolivia

Las políticas del MAS

El actual gobierno y su nueva CPE, bajo la denominación del Estado Plurinacional de Bolivia, propone una limitada “reingeniería” del sistema político basada en el reconocimiento constitucional y las autonomías indígenas como respuesta a la cuestión nacional. Sin embargo, al reducir las autonomías a las regiones campesinas, por un lado niega derechos nacionales a los millones de habitantes urbanos, como los pobladores de origen aymaras que han formado la ciudad de El Alto, y por otro lado, las autonomías indígenas, quedan enmarcadas en los departamentos y confinadas a áreas empobrecidas, sin desarrollo productivo e industrial, lo que las convertirá en presa fácil de la voracidad de empresas y transnacionales, que podrán aprovechar la etiqueta intercultural para acceder al saqueo de sus materia primas y recursos naturales.

Vemos como el discurso intercultural ligado a la llamada “revolución democrática y cultural”, descolonizadora es en realidad la cobertura ideológica de las más rancias recetas reformistas, ya que creer que con esas diluidas concesiones político-institucionales, confinando a los pueblos indígenas en sus regiones, facultándolos a crear nuevos impuestos, que pagarán ellos mismos, se puede escapar a la pobreza y alcanzar un pleno desarrollo material y cultural es solo demagogia reaccionaria. Por supuesto, tampoco resuelve nada creer que si los hijos de la burguesía aprenden un idioma nativo en el sistema educativo (ya que la interculturalidad se sostiene en el bilingüismo), se terminarán el racismo y la “exclusión urbana”. Esto no cambiará en nada la situación de las hijas e hijos de aymaras, quechuas y guaraníes que, por ejemplo, deben servir de trabajadoras del hogar, peones, obreros, etc. en la peor superexplotación.

El programa obrero y socialista que defendemos los trotskistas, no niega las demandas nacionales de los pueblos originarios. Todo lo contrario, las apoya en cuanto tienen de progresivo y cuestionan profundamente el orden capitalista que el MAS pretende “humanizar”. Defendemos no solo el derecho a la Tierra y el Territorio, a

organizarse autónomamente, sino a la completa autodeterminación (incluso, a una separación de estas nacionalidades si así lo desearan). Sin embargo los marxistas no les mentimos a los pueblos oprimidos: ninguna autonomía ni separación garantiza la superación de la miseria, el atraso, el racismo y la discriminación étnica, bajo la mano de las burguesías semicoloniales y el imperialismo. Es preciso romper con el sistema capitalista que tiene sus fundamentos en la explotación y la opresión de las amplias mayorías trabajadoras y populares. Un poder revolucionario de los obreros, campesinos, indígenas y sectores populares empobrecidos es el único que podría reconstruir desde sus cimientos la economía y la sociedad y así, dar respuesta real a las demandas nacionales de los pueblos originarios.

Marxismo e indigenismo

En el próximo número de nuestra revista teórica **Lucha de Clases** (en preparación), abordaremos no solo estas problemáticas de enorme actualidad sino que intentaremos bosquejar una interpretación marxista de la estructura y dinámica actual de la comunidad campesina, frente a distintas visiones indigenistas e indianistas. La contribución de los estudiantes de la UPEA con los que hemos abordado estos temas ha sido una valiosa contribución para avanzar en un programa y un posicionamiento político que sin devaluar la enorme importancia que tienen en nuestro país los problemas étnico-culturales originados en la opresión de más de 30 nacionalidades e idiomas, plantee claramente que no tendrán solución real –como tampoco la miseria y explotación de nuestros pueblos– en los marcos del orden económico, social y político y cultural del capitalismo, sino es ligados e una estrategia de emancipación revolucionaria y socialista.

Por Javo Ferreira

Notas:

1. García Linera, siguiendo al sociólogo francés P. Bordieu, habla de redistribución de capitales simbólicos, capitales étnicos capitales burocrático-administrativos etc. Ver “Autonomías regionales indígenas y Estado Multicultural”, en *Una lectura de descentralización regional a partir de identidades culturales*. ILDIS, La Paz.
2. Idem. Pág. 5.
3. Idem. Pág. 23.

La movilización estudiantil y la lucha por el voto universal

UNA IMPORTANTE y concurrida movilización, con miles de estudiantes universitarios recorrió las calles del centro pazeño a principios de octubre pasado para repudiar el decreto 304 con el que el gobierno intentó terminar con la autonomía universitaria. El decreto establecía que las instituciones de educación superior pasen a depender del Ministerio de Educación, medida con la cual el masismo pensaba alcanzar el control de la universidad y liquidar la autonomía. El mismo día en que se realizó la marcha, el gobierno y la torpe burocracia masista corrieron asustados a anular el decreto para evitar que se pusiera en marcha un enorme proceso de movilización y lucha estudiantil. Sin embargo y a pesar del anuncio de que el decreto había sido anulado, miles de estudiantes, además de docentes y administrativos, recorrieron las calles de la Paz, obligando a las autoridades a mantener la medida de marchar, pese a que estas intentaron levantarla arguyendo que el decreto ya estaba anulado.

Esa acción demostró la disposición del movimiento estudiantil a defender la autonomía de las universidades contra la ingerencia gubernamental. La composición mayoritariamente joven de la marcha, y la energía y el entusiasmo demostrado por carreras como la de Economía, fueron señales de que algo está cambiando en el movimiento estudiantil, como lo reflejó también en los primeros meses del año la lucha de los estudiantes de Comunicación Social contra los docentes truchos, llegando a la toma del Monoblock de la UMSA.

También a mediados de año, se movilizaron miles de estudiantes de la UPEA (Universidad Pública de El Alto), que repudiaron en las puertas del CUB los intentos de la derecha (encabezada por Gonzalo Taboada y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) de terminar con el voto universal en la UPEA, y para esto, amenazan con dejar a la UPEA fuera del sistema de universidades chantajeando a los estudiantes para que renuncien al voto universal a cambio de poder acceder a la titularización (los estudiantes de la UPEA en la actualidad se reciben pero no obtienen un título reconocido por el sistema de universidades).

El debate que ha comenzado en los primeros años de varias carreras de la UMSA a favor del voto universal y por el aumento del presupuesto son síntomas del nuevo estado de ánimo entre los estudiantes jóvenes. Es que estos están naciendo a la vida política con un gobierno que les intenta quitar la autonomía, que destina un magro presupuesto al desarrollo educativo, que no se animó a tocar a las Universidades privadas en manos de los “empresarios de la educación”, que no se animó a cercenar el rol de la Iglesia en escuelas, es decir, un gobierno que en lo que se refiere a las políticas educativas, inclusive intenta aplicar políticas heredadas de sus precedentes como es la pretensión de municipalizar la educación media.

El debate que atraviesa la vanguardia estudiantil, gira en torno a como terminar con las camarillas corruptas que gobiernan con el voto ponderado



y utilizan la autonomía universitaria para garantizar sus prebendas. En este sentido es crucial alentar el frente único de los Centros de Estudiantes y Facultativos que no estén comprometidos con el régimen, agrupaciones estudiantiles y estudiantes independientes, para desarrollar todo tipo de iniciativas para enfrentar a las camarillas, empezando por organizar a cientos de estudiantes que se propongan conseguir el voto universal, medida elemental para combatir este régimen universitario anti estudiantil.

En la lucha contra el voto ponderado, por el aumento de presupuesto y contra las camarillas los estudiantes nos vamos a enfrentar al actual sistema de gobierno universitario donde las autoridades imponen sus planes apoyándose en los burocráticos mecanismos del HCU, que coopta al sector docente a través de las camarillas corrompidas, subordinando a la representación estudiantil y excluye a los trabajadores universitarios. Por eso, hay que impulsar la lucha en la perspectiva de imponer un Gobierno tripartito, con mayoría estudiantil, y participación de los trabajadores administrativos. En el camino de enfrentar a la camarillas, creemos que otro punto de vital importancia es que los Centros de Estudiantes sean constituidos proporcionalmente según los votos obtenidos por cada fuerza, pues actualmente cuando una agrupación saca inclusive hasta un 40% de los votos pero no gana la elección, no obtiene ni siquiera una secretaria del centro, lo que constituye una clara proscripción de las minorías. La proporcionalidad en las carteras obtenidas según porcentaje en las elecciones a centro permitiría que las minorías controlen a quien dirige el centro, y de esta manera se pueda denunciar y actuar frente a cualquier maniobra burocrática o acto de corrupción de los dirigentes del centro.

Argentina Gran lucha de 2.600 obreros y triunfo clasista en la multinacional Kraft-Terrabusi

EL PASADO 18 DE AGOSTO en Argentina la empresa alimenticia Kraft-Terrabusi despidió a 156 trabajadores -incluyendo entre estos a sus delegados y representantes sindicales- por haberse organizado y reclamado mejores condiciones de trabajo durante la epidemia de Gripe A. Kraft Foods es la tercer multinacional alimenticia más grande del mundo y no tiene ninguna “crisis económica”. Al contrario, su planta de Pacheco aumentó las ventas de 50 millones de pesos argentinos en mayo a casi 70 millones en junio de este año. La poderosa trasnacional, que cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales, la embajada estadounidense en Buenos Aires, y la derecha, quería liquidar a la organización sindical en la fábrica para abrir el camino a una reestructuración brutal, imponiendo el “turno americano” de 12 horas y echando a todo el turno noche. Contaba con la colaboración de la burocracia del Sindicato nacional de la Alimentación, dirigido por el burócrata peronista Daer, y el “dejar pasar” del Gobierno argentino, pero no esperaba la gran respuesta de los trabajadores.

Tras dos meses y medio lucha permanente (corte de calles, enfrentamientos con la policía, movilizaciones) y con el apoyo de sindicatos combativos, agrupaciones estudiantiles, partidos de izquierda, los 2.600 obreros y obreras de Terrabusi-Kraft lograron imponer, primero, la reincorporación de los 11 miembros de la Comisión Interna y a varias decenas de los ilegalmente despedidos, si bien todavía falta restituir a 53 trabajadores.

Este acuerdo llevó una división de los representantes, entre la mayoría de la Comisión Interna, orientada por Bogado, dirigente maoísta (del reformista PCR), que prefirió ceder al planteo de la empresa; y Javier Hermosilla (representante del combativo turno de la noche, trotskista y miembro de nuestra organización hermana en Argentina, el PTS.), junto a otros delegados que planteaban que había buenas condiciones para seguir la lucha por la reincorporación de los demás despedidos y que debía una asamblea general -no los dirigentes- la que resolvera al respecto.

A esta altura, la lucha de Kraft ya se había convertido en un gran “conflicto testigo”, ampliamente discutido en la prensa y por la vanguardia obrera y un hito que mostraba que avanza un nuevo

“sindicalismo de base” en muchas fábricas y empresas.

Al cierre de esta edición, las elecciones para renovar la CI, pese al clima de presión impuesto por la empresa (con la vigilancia de jefes y “líderes”, policías dentro de la fábrica y los despedidos afuera, etc. dieron como resultado la victoria de la Lista 1, encabezada por Javier Hermosilla y apoyada por el PTS (676 votos contra 660 de la Lista de Bogado y 390 de la Lista 3, burocrática y proempresarial). El sector más combativo de la fábrica le dio el triunfo a la opción clasista, combativa y democrática, contra el sector más conciliador y contra los planes de la empresa, el gobierno y la burocracia, que hasta último momento intentaron desconocer el resultado y hacer fraude.

La lucha de Terrabusi muestra que se ha abierto un proceso de maduración de la conciencia de importantes franjas de la clase trabajadora argentina, que pone sobre el tapete la defensa de la representación sindical de base en el lugar de trabajo, situación que no quieren ni los empresarios, ni la burocracia sindical sostenida por el gobierno de los Kirchner. Se trata de dar una pelea para coordinar las luchas y unir las fuerzas de la vanguardia obrera contra los patrones, la burocracia y el gobierno. Pero esta pelea debe elevarse también al terreno político y por la independencia de clase.

En este sentido, los obreros de Zanon (fábrica recuperada y sin patrones) y el Sindicato Ceramista de Neuquén impulsaron el pasado 17 de octubre en el Hotel Bauen (un hotel en manos de sus trabajadores) de la Capital Federal un primer plenario donde 400 representantes y trabajadores de la industria, magisterio, transporte, etc., decidieron avanzar en impulsar una corriente político sindical clasista que y abrir el debate sobre la necesidad de impulsar una herramienta política, un partido de la clase obrera basado en sus propias organizaciones de lucha. Nuestros compañeros del PTS se proponen colaborar unitariamente en el impulso de esta importante iniciativa por la independencia política de los trabajadores que surge de uno de los bastiones que ha dado la lucha de clases en la Argentina.

Por Ezra

Honduras bajo la tutela del imperialismo norteamericano

En crisis acuerdo de Zelaya con los golpistas

EL 28 DE JUNIO fue destituido por la fuerza el Presidente Constitucional de Honduras Manuel Zelaya, por un golpe militar que lo expulsó del país y lo reemplazó por Micheletti, con apoyo de las principales fracciones de la burguesía, la oposición parlamentaria, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, la iglesia y las Fuerzas Armadas.

Las razones que han llevado a que se perpetre este golpe son la incorporación de Honduras al ALBA y a PETROCARIBE, lo que provocó desagrado en la burguesía reaccionaria y proimperialista; un decreto de aumento salarial que dispuso el gobierno pese al rechazo de los empresarios y la propuesta de consultar en las urnas para reformar varios artículos de la Constitución Política. Combatidos por ser “ilegal, inconstitucional y antidemocrática” como justificación del golpe. Pero por sobre todo, el golpe se llevó a cabo para sentar un precedente en la región para quienes no se ajusten al orden establecido por el imperialismo.

Como respuesta, la resistencia del pueblo hondureño se ha mantenido en pie de lucha durante 4 meses: saliendo a las calles, no acatando el toque de queda, realizando mítines, tomando locales e incluso alzando barricadas en numerosos barrios populares de la capital Tegucigalpa. Para poder derrotar la resistencia, Micheletti y los militares han lanzado una brutal represión con varios muertos y numerosos heridos, deteniendo y golpeando activistas, invadiendo las colonias (barrios), disparando a los manifestantes, y prohibiendo la libertad de reunión, prensa, asociación, tránsito y protesta. Tras una serie de negociaciones patrocinadas por la OEA, el imperialismo y los gobiernos de la región, con intervención del ex presidente costarricense Arias (viejo agente de los yanquis), los resultados muestran que el “diálogo” al que se prestaron Zelaya y las direcciones de la resistencia —en lugar de impulsar la huelga general de masas y la autodefensa hasta derrotar a los golpistas— sólo ha servido para desgastar la resistencia (reducida a un factor de presión) y favorecer a Micheletti, que pese a su

debilidad y aislamiento internacional, cuenta con el respaldo de los republicanos y sectores del Partido Demócrata de Estados Unidos (que tienen lazos históricos con la oligarquía y los militares hondureños). Un elemento clave para la OEA y el imperialismo es evitar que



Micheletti y su camarilla caigan como producto de la movilización popular. Así, días pasados el representante norteamericano T. Shannon impulsó un acuerdo completamente favorable a los golpistas donde Zelaya sacrifica todas las demandas populares, juzgar a los represores e incluso convocar a una asamblea constituyente. Legitiman la fraudulenta “salida política” de las elecciones del próximo 29 de noviembre, a cambio de una incierta “reposición simbólica” en su cargo que posiblemente, ni siquiera se cumpla, o que ha llevado a Zelaya a protestar y amenazar con romper el acuerdo. Los gobiernos latinoamericanos se subordinaron a la política de Obama y Chávez, Correa y Evo Morales no llamaron a una sola movilización real de solidaridad a escala latinoamericana. Como dice la Declaración de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (ver el texto completo en la web:), “Participar en las elecciones es avalar la trampa de los golpistas. Es necesario organizar el boicot activo contra las elecciones fraudulentas del 29 de noviembre y continuar la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Revolucionaria que ponga en cuestión la subordinación al imperialismo, el dominio oligárquico y abra el camino a la lucha por un gobierno obrero, campesino y popular. La resolución reaccionaria en Honduras, impulsada por Estados



Arriba: Patrulla militar ante una pintada contra el golpe. A la izquierda: Abrazo entre el golpista Micheletti y el depuesto Zelaya.

que la lucha por derrotar al régimen golpista está indisolublemente ligada a la lucha contra la patronal local, su personal político-militar y el imperialismo. A pesar del repudio generalizado en todo el continente al golpe de Estado en Honduras, las direcciones tradicionales, burocráticas, nacionalistas y reformistas de la clase obrera latinoamericana, no organizaron ninguna acción significativa de

solidaridad activa con la lucha del pueblo hondureño, alimentando la confianza en que el golpe se terminaría por la vía del diálogo y de los buenos oficios de la OEA y del imperialismo bajo la dirección de Obama. La experiencia de Honduras muestra, una vez más, que sólo los trabajadores del continente en alianza con los campesinos pobres y los sectores populares, y con sus propios métodos de lucha, pueden enfrentar consecuentemente al imperialismo, a las burguesías y a las oligarquías”

Por Ezra

México SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS

El domingo 11 de octubre, mientras cientos de efectivos de la Policía Federal tomaron sorpresivamente las instalaciones centrales de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el presidente Felipe Calderón, a través de un decreto, determinó la extinción de dicha empresa con el argumento de no ser “rentable”. Al cerrar LyFC y despedir más de 46 mil trabajadores son dos los objetivos que pretende el gobierno. Primero, claramente político, aplastar a un sector fundamental del movimiento obrero, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a su organización sindical, estableciendo un precedente y una lección para otras organizaciones obreras y al conjunto de los trabajadores del país. Segundo, posibilitar la vía a la privatización de la producción y la comercialización de la energía eléctrica para que beneficie a las transnacionales y a la burguesía nativa.

En respuesta a este ataque, el 15 de octubre se realizó una

movilización convocada por el SME, la cual congregó aproximadamente 300.000 personas, en una marcha de más de 6 kilómetros que se inició a las cuatro y media de la tarde y que concluyó como a las 10 de la noche. Fue la movilización obrera más importante de los últimos 15 años que se realiza en México, lo que demuestra la disposición de los trabajadores para enfrentar el ataque del gobierno de Calderón. Igualmente, el día domingo 25 de octubre, se llevó a cabo la Gran Asamblea por la Resistencia Popular en la que participaron más de 30 organizaciones solidarias, en esta asamblea el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó que el próximo jueves 5 de noviembre se definirá en un encuentro con cientos de sindicatos y organizaciones populares la fecha en que podría estallar una huelga nacional contra el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro.

Para derrotar el ataque del gobierno es esencial confiar en

los métodos de lucha y de movilización de los trabajadores en alianza con el conjunto de los sectores populares, y no creer (como la política pactista y reformista de la dirección del SME frente al conflicto) que mediante mecanismos institucionales como la promoción de una “controversia constitucional”, se vaya a echar atrás esta declaración de guerra política del gobierno; pues significaría depositar ilusiones en que una institución como el Congreso de la Unión o que la Suprema Corte de Justicia vayan a actuar a favor de los trabajadores.

Nuestros compañeros de la LTS de México (parte de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional) están impulsando activamente la campaña en solidaridad con los electricistas, planteando la coordinación y la necesidad de preparar la huelga nacional para derrotar a Calderón y su plan privatizador, levantando un programa acorde con los intereses de los trabajadores.

Por Ezra